



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	María Isabel Berrio Echeverri
DEMANDADO	Protección S.A.
LITISCONSORTE	Seguros de Vida Suramericana S.A. y Ana Lucía Echeverri Berrio
RADICADO	05-001-31-05-009-2019-00373
TEMA	Pensión de sobrevivientes
DECISIÓN	Confirma sentencia

El dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 208** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **MARÍA ISABEL BERRIO ECHEVERRI** contra la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A.**, y como litisconsortes necesarios por pasiva a **SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**, y **ANA LUCÍA ECHEVERRI BERRIO**, con radicado **05-001-31-05-009-2019-00373**.

• **PRETENSIONES:**

La demandante solicita se declare que le asiste el derecho a la pensión de sobreviviente en razón de la muerte de su compañero permanente **LUIS GUILLERMO ECHEVERRI MONTOYA**. En consecuencia, se condene a **PROTECCIÓN S.A.** a reconocer y pagar la pensión de sobreviviente a partir del 1° de febrero de 2017, período inmediatamente siguiente aquel en que **PROTECCIÓN S.A.** cesó en el pago de la prestación económica a la señora **ANA LUCIA ECHEVERRI**; mesadas adicionales, intereses moratorios y/o indexación y costas procesales.

- **HECHOS:**

Fundamenta sus pretensiones, indicando que nació el 12 de marzo de 1961. Que se conoció con el señor LUIS GUILLERMO ECHEVERRI MONTOYA en el año 1990, formalizando su noviazgo en agosto del mismo año. Que fruto de esta relación nació su hija ANA LUCIA ECHEVERRI BERRIO el 31 de enero de 1992 y que actualmente es mayor de edad. Que en mayo de 1993 se fueron a vivir bajo el mismo techo, en la casa de la madre del causante, por un lapso de 2 años, y luego fijaron su domicilio en el barrio Obrero, en donde permanecieron por 9 años aproximadamente. Que convivió con LUIS GUILLERMO ECHEVERRI en calidad de compañera permanente, en forma ininterrumpida, compartiendo techo, lecho y mesa desde mayo de 1993 hasta el 4 de abril de 2003, fecha en la que falleció con ocasión a un accidente de tránsito. Que cuando dejó de laborar, fue afiliada por su compañero a la caja de compensación familiar COMFAMA en calidad de beneficiaria, desde el 22 de mayo de 1998 hasta el 4 de abril de 2003. Que PROTECCIÓN S.A. reconoció la pensión de sobreviviente a la hija ANA LUCIA ECHEVERRI en un 100%. Que la reclamación se hizo a nombre de su hija, luego de que un asesor de la AFP le dijera que no tenía derecho alguno, pues ella le había comentado que los 3 últimos días anteriores al deceso, este permaneció en casa de su madre como consecuencia de una discusión de pareja. Que PROTECCIÓN S.A. contrato con SURAMERICANA S.A. una renta vitalicia, la cual cubrió el pago de las mesadas hasta que la hija cumplió los 25 años de edad. Que reclamando ante SURAMERICANA S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, el cual le respondió que esto le correspondía a PROTECCIÓN S.A. Y que radicó solicitud a PROTECCIÓN S.A. para el reconocimiento y pago de la pensión la cual fue negada por no acreditar el tiempo de convivencia exigido al momento del fallecimiento del afiliado.

- **CONTESTACIONES:**

✓ PROTECCIÓN S.A.:

Frente a los hechos de la demanda, manifiesta que no le consta la fecha de nacimiento. Que no le consta las circunstancias en las que se desarrolló la relación de la pareja, pues son situaciones de carácter íntimo y personal de la actora y el afiliado fallecido. Que es cierto que fruto de esta relación de pareja

nació ANA LUCIA ECHEVERRI BERRIO, tal como consta en las pruebas documentales. Que no es cierto que la accionante y el señor LUIS GUILLERMO ECHEVERRI convivieran como compañeros permanentes desde mayo de 1993 hasta el 4 de abril de 2003, pues con las declaraciones extra juicio de la señora MARIA LUZ AGUDELO BERRIO y LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ECHEVERRY, se logra determinar que el causante vivía con sus padres y que la pareja se había separado. Que es cierta la muerte del señor LUIS GUILLERMO ECHEVERRI y el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la hija. Que no es cierto que el asesor de PROTECCIÓN S.A. le indicara al momento de la reclamación, que no tenía derecho alguno, pues los funcionarios de esta entidad nunca le manifiestan a los reclamantes si tienen derecho pensional o no, pues es dentro del trámite administrativo que se realizan las investigaciones para la definición del derecho; y se observa que solo elevo reclamación la hija. Y que la prestación económica en ningún momento ha estado a cargo de PROTECCIÓN S.A., pues desde el año 2003 la obligación la asume SURAMERICANA S.A. Se opuso a las pretensiones. Y presentó varias excepciones de mérito.

✓ SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.:

Frente a los hechos de la demanda, manifestó que no le consta lo referente a la relación que sostenía la demandante con el causante pues son afirmaciones sobre la intimidad de la pareja. Que no le consta que ANA LUCIA ECHEVERRY BERRIO sea consecuencia de una “relación de pareja”, pues el hecho de la procreación no es indicativo de la existencia de comunión de vida entre los progenitores, sin embargo, aceptó la paternidad y maternidad. Que no le consta que el señor LUIS GUILLERMO ECHEVERRI y MARIA ISABEL BERRIO, hayan convivido a partir de 1993, ya que la entidad no tuvo trato con la pareja y no fue la encargada del reconocimiento del derecho de los beneficiarios que actualmente reciben la pensión. Que el reconocimiento prestacional a la hija de la pareja fue efectuado, única y exclusivamente por PROTECCIÓN S.A. y que la modalidad de pago de la pensión de sobreviviente a la hija beneficiaria, reconocida por PROTECCIÓN S.A. mediante renta vitalicia fue contrata por esta, la modalidad de pago de pensión no es un asunto relacionado con el reconocimiento de los beneficiarios, lo que, para el caso, exclusivamente compete a PROTECCIÓN S.A. Se opuso a las pretensiones. Y presentó varias excepciones de fondo.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 09 de noviembre de 2020, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** que a la señora MARÍA ISABEL BERRIO ECHEVERRI le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en concurrencia con su hija ANA LUCÍA ECHEVERRI desde el 4 de abril de 2003, como consecuencia de la muerte de su compañero y padre respectivamente el señor LUIS GUILLERMO ECHEVERRI MONTOYA.

Como argumento de su decisión expuso que, con la prueba testimonial y los documentos anexados con la demanda, se logró demostrar la convivencia de la demandante con el afiliado fallecido, sin que sea relevante la separación por la discusión presentada en los últimos 3 días, pues se logró probar que entre la pareja existió solidaridad, apoyo y comunidad de vida, no una simple cohabitación.

Y, como consecuencia, **CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar por concepto de mesadas ordinarias pensionales causadas, incluyendo las adicionales de junio y diciembre, desde el 1° de febrero de 2017 hasta el mes de noviembre de 2020, la suma de \$9'590.321; por mesadas del año 2017, \$10'937.388; por mesadas del año 2018, \$11'593.624 por el año 2019 y \$10'533.633 por el año 2020.

Asimismo, **CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a reconocer y pagar los intereses moratorios sobre dicho retroactivo pensional causados desde el 5 de junio de 2017 hasta el momento del pago efectivo de dicho retroactivo pensional.

Y, **CONDENÓ** en costas procesales a PROTECCIÓN S.A.

- **APELACIÓN:**

✓ PROTECCIÓN S.A.:

Presentó su recurso de apelación, señalando que no le asiste derecho a la demandante a obtener el reconocimiento de la prestación económica, toda vez que la demandante en representación de su hija menor ANA LUCIA

ECHEVERRI elevo reclamación tendiente a obtener la prestación únicamente a favor de su hija, siendo entonces reconocido tal derecho en favor de la misma y no siendo así en favor de la señora MARÍA ISABEL BERRIO, por no haber convivido el tiempo exigido por la ley en cuanto a la fecha del deceso del afiliado.

Que se anexaron dentro del proceso declaraciones extra juicio para el año en que falleció el afiliado, donde la señora MARÍA LUZ AGUDELO BERRIO y el señor LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ECHEVERRY, manifiestan textualmente: “... *Hace 18 años conocí al señor Luis Guillermo Echeverry Montoya hasta el momento de su fallecimiento convivía en compañía de sus padres...*”, lo cual es una muestra inequívoca de la no cohabitación con la demandante.

Que el reconocimiento pensional a la entonces menor de edad ANA LUCIA ECHEVERRI se efectuó bajo la modalidad de renta vitalicia contratada con la compañía SURAMERICANA, entidad ésta que tenía a su cargo el pago de la obligación de la pensión de sobrevivientes hasta el momento en que la misma cumpliera sus 25 años de edad, por lo que PROTECCIÓN S.A. trasladó todos los saldos de la cuenta de ahorro individual del afiliado fallecido y clausuró su cuenta personal, quedando la obligación a cargo de la aseguradora SURAMERICANA, por lo que a PROTECCIÓN S.A. no le corresponde el reconocimiento de una prestación, sino a la entidad que tenía a su cargo el pago de la obligación en su momento, como lo es SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA, pues la relación sustancial que se presentó entre la joven ANA LUCIA ECHEVERRI y la aseguradora a partir del año 2003 es independiente y ajena a PROTECCIÓN S.A.

Que, dentro de la prueba practicada de cara a la acreditación de la convivencia, no existe razón sobre las circunstancias particulares de determinar dicha circunstancia, pues si bien el juez considera que según los testigos no hubo duda sobre la indicación de las pertenencias del afiliado dentro del hogar, no se justifica el conocimiento sobre estos dichos, pues solo se basan en la certeza con la que afirman tal cuestionamiento.

Que el acompañamiento y la solidaridad de conformar una familia se había roto en razón del distanciamiento de la actora, el cual se produjo antes del

deceso del afiliado, puesto que nunca se habló de un distanciamiento previo al que se suscitó antes de la muerte del afiliado, lo cierto es que se desconoce si éste retorno de nuevo al hogar en aras de solventar esa intención que se cita por parte de la jurisprudencia, ese acompañamiento y solidaridad lo cual no se probó, ya que una cosa es que una persona se ausente dentro de determinado tiempo y regrese de nuevo al hogar, como lo dice la jurisprudencia, pero lo cierto es que el afiliado falleció y estaba ausente del hogar.

Que no se pueden desconocer los argumentos de la señora MARÍA LUZ AGUDELO y el señor LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ECHEVERRY, que son personas que conocían, verificaban su circunstancia de convivencia y que realmente los testigos en contraste con estos, no determinaron específicamente esa situación al momento del fallecimiento del afiliado, ya que la señora CLAUDIA LUCIA CARVAJAL BLANDÓN no sabía si el afiliado pernoctaba en otro lugar como tampoco las discusiones que pudiera tener la pareja, a sabiendas de que no eran personas que estuvieran todo el tiempo conociendo sobre cómo se desenvolvía el núcleo familiar, lo cierto es que ignoraban la ausencia, así como el señor TOMAS ANTONIO PABÓN VILLEGAS, pues son personas que 1) es el arrendador del inmueble donde vivió la pareja y donde bien hizo una buena amistad, pero no era muy allegada, según lo manifestó la misma. Que, si bien el señor TOMAS ANTONIO PABÓN, pudiera considerarse una persona más allegada, lo cierto es que, si el afiliado falleció el 4 de abril del 2003, un viernes, ese señor no tuvo conocimiento del afiliado durante toda esa semana, solamente los sábados y lastimosamente el sábado siguiente el señor ya había fallecido. Y que el testigo FABIO URIBE nunca fue a la casa de la pareja, lo cual es un testigo que no aporta mayor información dentro del presente proceso; por lo tanto, los testigos desconocen e ignoran esa ausencia que la demandante confiesa y que no se puede hablar de una interrupción porque el afiliado falleció, y nunca regresó al hogar, por lo que se debe entender que nunca volvió a constituir esa unión familiar.

Y que no se puede condenar a los intereses moratorios, ya que para negar el derecho era suficiente por parte de PROTECCIÓN S.A. no saber a ciencia cierta si la demandante convivió con el afiliado a la fecha de la muerte, según la prescripción normativa y donde se refuerza no solo en la indicación de la demandante sobre la interrupción de su convivencia sino desde prueba

anterior a la fecha del fallecimiento del afiliado, es por esto que PROTECCIÓN S.A., no puede hacer uso de una figura como la de in dubio pro operario como lo indica el juez para reconocer una prestación cuando eventualmente no había una igualdad en la información, mucho menos una forma de contrastar la misma, ante la ausencia de poder compactar y verificar con las personas más allegadas, con el núcleo laboral del afiliado dicha información.

- **ALEGATOS:**

- ✓ PROTECCIÓN S.A.:

Señaló en sus alegatos que se debe revocar la sentencia de primera instancia, toda vez que la señora BERRIO ECHEVERRI no dio cumplimiento al requisito de convivencia con el afiliado fallecido en la forma establecida en el artículo 13 de la ley 797 de 2003. Que se probó que el afiliado no hacía vida marital con la accionante en tanto se cuenta con declaraciones extraproceso donde los declarantes manifiestan que el afiliado convivía con sus padres para el momento de su muerte. Que PROTECCIÓN S.A no puede ser la llamada para el reconocimiento de la prestación económica, tras evidenciarse que no cuenta con saldos de donde pagar la aludida prestación, por no ser pagadora de la misma y al no probarse que la demandante sería beneficiaria de la pensión. Que los testigos traídos al proceso no justifican las razones por las que les constan sus dichos, y además no cuentan con riqueza en detalles sobre las circunstancias de convivencia del afiliado y la actora. Que como lo confiesa la actora, el afiliado había abandonado su hogar sin que se probara un retorno al mismo. Y que no deben proceder los intereses moratorios ni las costas procesales, ya que se encontró una razón donde para no reconocer la prestación, aunado a la pasividad de la accionante sobre la prestación reconocida en su momento a su hija.

- ✓ SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.:

En sus alegatos expuso que la hija de la demandante eligió para el pago de su mesada la modalidad de renta vitalicia, para lo cual contrató la misma con Seguros de Vida Suramericana S.A. Que el deber de la administradora de pensiones es el de reconocer a los beneficiarios del derecho y otro diferente el del pagador cuando la modalidad es la renta vitalicia, sin que le corresponda

a la aseguradora, definir o no el derecho de personas que, como la demandante aduzcan de forma sobreviniente que también son beneficiarios, lo cual no puede definir el pagador de las mesadas. Que, en caso de reconocérsele el derecho a la demandante, podría elegir cualquiera de las modalidades de pago de la mesada que establece la ley y, aun si escogiera la misma (renta vitalicia), esta no tendría que ser necesariamente con SURAMERICANA, y aún si lo fuera, sería un nuevo y diferente contrato para el pago de una nueva y diferente obligación y no una extensión de la obligación adquirida en su momento para con ANA LUCÍA ECHEVERRI. Por lo que se debe confirmar la absolución de esta entidad.

Y que, sobre la procedencia del derecho respecto de la señora demandante, se debe absolver a PROTECCIÓN S.A. del reconocimiento de la prestación, ya que la decisión del juez no es sólida, ya que los testigos dan cuenta de unos hechos ocurridos 20 años antes de su declaración, de forma muy general y amplia, mientras que, en la investigación adelantada por la AFP, lo que evidencian es una situación contraria a la descrita por los declarantes en audiencia. Que quedó probado que el causante de la pensión no hacía vida en común con la accionante, que residía con sus padres y que estaba separado de la demandante. Que tratándose de compañeros permanentes la convivencia no se presume, sino que es carga acreditarla por quien la alega. Y que no se debe condenar a los intereses moratorios, pues si existía duda de la configuración de la convivencia, la cual solo quedó superada en juicio.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver los problemas jurídicos, se hace necesario hacer un breve recuento de las pruebas documentales aportada por las partes, y que sirve para resolver el presente proceso:

- Registro civil de defunción del señor LUÍS GUILLERMO ECHEVERRI MONTOYA, en donde se corrobora que falleció el **4 de abril de 2003**.¹
- Respuesta al derecho de petición elevado por la demandante y dirigido a COMFAMA, en donde esta entidad responde que “... estuvo afiliada a esta Caja de Compensación Familiar en calidad de compañera permanente

¹ Folio 28 del expediente digitalizado

del señor Luis Guillermo Echeverri Montoya en el período comprendido desde el 22 de mayo de 1998 hasta el 04 de abril de 2003.”²

- Resolución 2003-5941, por medio de la cual PROTECCIÓN S.A., reconoce la pensión de sobrevivientes en un 100%, por la muerte de LUIS GUILLERMO ECHEVERRI MONTOYA a la hija ANA LUCÍA ECHEVERRI BERRIO, en la modalidad de renta vitalicia, siendo contratada la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A.³
- Comunicado expedido por PROTECCIÓN S.A., a través del cual se le indica a la demandante MARÍA ISABEL BERRIO ECHEVERRI, que no procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por no acreditar el tiempo de convivencia.⁴
- Declaraciones extraproceso efectuadas por los señores FABIO DE JESÚS URIBE GARTNER, CLAUDIA LUCÍA CARVAJAL BLANDÓN, AICARDO SERNA CASTAÑEDA, TERESA DE JESUS MONROY y LUIS FERNANDO SUAREZ GALEANO.⁵ Y las presentadas por PROTECCIÓN S.A. por los señores LUÍS FERNANDO SEPÚLVEDA ECHEVERRI y MARÍA LUZ AGUDELO BERRIO.⁶
- Historia laboral del señor LUÍS GUILLERMO ECHEVERRI MONTOYA, en donde figura que en los últimos 3 años cotizó 277.72 semanas.⁷
- Investigación administrativa realizada por la empresa LOGISTICA EMPRESARIAL SEGURA, por medio de la cual se concluye que se percibió una interrupción de la convivencia aproximadamente por un mes antes de la muerte del afiliado, sin lograrse realizar todas las labores investigativas pertinentes.⁸

Conforme a lo anterior, los **problemas jurídicos** a resolver de conformidad con el recurso interpuesto, se basará en los siguientes temas: **i)** la calidad de

² Folios 26 y 27

³ Folios 30 a 32

⁴ Folio 41

⁵ Folios 43 a 46

⁶ Folio 43 del segundo PDF

⁷ Folios 55 a 58 del segundo PDF

⁸ Folio 2 a 8 del expediente digitalizado - Memorial allegado al Juzgado, correspondiente a la prueba de oficio solicitada.

beneficiaria de la señora MARÍA ISABEL BERRIO ECHEVERRI; y de existir el derecho pensional, se analizará, *ii)* cual entidad es la que debe reconocer la prestación económica; y, por último, *iii)* la condena impuesta por intereses moratorios.

i. Calidad de beneficiaria:

Para comenzar es necesario señalar que la normatividad aplicable conforme a la fecha de fallecimiento del señor LUÍS GUILLERMO ECHEVERRI MONTOYA, es la consagrada en el artículo 74 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, el cual reza: *“En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”*.

Ahora, en lo que respecta a la acreditación del requisito de convivencia, la señora MARÍA ISABEL BERRIO ECHEVERRI en el interrogatorio de parte manifestó que, sostuvo una relación sentimental con el señor ECHEVERRI MONTOYA, desde el año 1989, conviviendo con este bajo el mismo techo a partir de 1993, primero en la casa de los padres del afiliado y posteriormente en el año 1995 se fueron a vivir al barrio Obrero, hasta que el afiliado falleció en el año 2003. Indicó que 3 días antes de la muerte, tuvieron un disgusto, por lo que el afiliado se fue a amanecer donde los papás, pero ellos seguían en constante comunicación. Señaló que no estaba afiliada en salud por su compañero, pero si la tenía afiliada a ella y a su hija a Comfama para recibir el subsidio. Y manifestó que el afiliado tenía sus cosas personales en la que casa que compartían juntos.

Así mismo, se recibió el interrogatorio de ANA LUCÍA ECHEVERRI BERRIO, quien es la hija de la demandante y el causante, y que para la fecha de la muerte de su padre tenía 11 años de edad, la cual señaló que cuando falleció su padre vivían los 3 juntos, indicando que el afiliado para la fecha de su muerte estaba en la casa de su abuela, pero que volvía a la casa donde ellas vivían, teniendo en sus recuerdos que siempre permanecieron juntos.

En lo referente al interrogatorio de parte efectuado por la demandante, es necesario recalcar que existe un principio universal, el cual señala que la

prueba no puede ser creada por quien la invoca, lo que quiere decir que la señora MARÍA ISABEL BERRIO ECHEVERRI no puede crear su propia prueba para luego valerse, sacar provecho o beneficio de la misma, pues es indiscutible no solo la presunción sino la convicción de la existencia de situaciones que afectan su credibilidad e imparcialidad.

Así pues, para corroborar la información suministrada por la demandante, se recibieron los siguientes testigos CLAUDIA LUCIA CARVAJAL, TOMAS ANTONIO PABÓN VILLEGAS y FABIO DE JESÚS URIBE GARTNER, los cuales manifestaron lo siguiente:

La testigo CLAUDIA LUCIA CARVAJAL, quien fue compañera de estudio de la demandante y vecina en el año 1995, expuso que ella le tenía alquilado un apartamento a la demandante y a su compañero, pero que conoce muy poco del compañero, es decir, al señor LUÍS GUILLERMO ECHEVERRI MONTOYA, ya que sólo veía cuando salía de trabajar o lo veía por fuera del apartamento compartiendo con la hija. Señaló que siempre los veía juntos, que nunca lo vio discutiendo, pero no sabe si en algún momento se llegaron a separar, ya que eso era muy interno de la pareja. E Indicó que no sabe si el afiliado fallecido amanecía permanentemente en la casa de sus padres, pero a su vez afirmó que éste si los ayudaba.

El señor TOMAS ANTONIO PABÓN VILLEGAS, quien conoce a la demandante hace más de 15 años en razón de su vecindad y al afiliado fallecido por tener una amistad desde la edad de los 18 o 20 años, afirmó que esta pareja convivió juntos hasta el día de la muerte del señor ECHEVERRI MONTOYA, indicando que primero se fueron a vivir con los padres del afiliado fallecido y después se independizaron y se fueron a vivir en un apartamento arrendado en el barrio Obrero, en donde los visitaba cada 15 o 20 días para compartir un almuerzo. Expuso que ellos nunca se separaron y vivieron juntos bajo el mismo techo hasta el momento de la muerte del señor ECHEVERRI MONTOYA. Y manifestó que la semana anterior al fallecimiento no los visitó y que no le consta si la pareja tuvo una discusión en el transcurso de esa semana.

Por último, se recibió al señor FABIO DE JESÚS URIBE GARTNER, quien fue vecino de la pareja en el barrio de la Magnolia, conociéndolos desde el año

1990 o 1992, el cual afirmó que en ese tiempo ellos convivieron juntos con los papas del afiliado fallecido, pasándose posteriormente más arriba a unas 5 o 6 cuadras, en donde vivieron juntos como 10 años más, sin llegarse a separar, no obstante, indica que nunca los visitó.

Por otra parte, la integrada como litisconsorte necesario SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., presentó al testigo MIGUEL ANTONIO FERIA, quien es empleado de dicha entidad en el área de rentas vitalicias y es el pagador de la nómina de los pensionados, el cual indicó que SURAMERICANA no puede determinar los beneficiarios de la pensión de sobreviviente, razón por la cual, quien decide quienes son los beneficiarios es PROTECCIÓN S.A., y por tanto, esta entidad solo asume el rol de pagadora y no pueden objetar a los beneficiarios.

Pues bien, en el **caso de autos**, de un análisis en conjunto de la prueba traída al proceso, se puede concluir que todos los testigos son unánimes y dan certeza y claridad a la Sala, para poder confirmar que la pareja efectivamente convivió bajo el mismo techo aproximadamente desde hace 8 años, es decir desde el año 1995 hasta el día de la muerte del afiliado el 4 de abril de 2003, existiendo los conceptos de ayuda y socorro mutuo, como claramente lo expusieron los testigos; por lo que se encuentra plenamente acreditado el requisito que exige la norma de 5 años previos al fallecimiento del causante.

No pasa por alto la Sala que la misma demandante fue espontánea y confiesa en su interrogatorio, que entre la pareja existió una discusión los 3 días anteriores al fallecimiento del afiliado, desplazándose el afiliado para donde sus padres, no obstante, contrario a lo manifestado por el apoderado de PROTECCIÓN S.A. para esta Sala, este hecho por sí solo, no es una señal clara del quebrantamiento de la relación, pues los testigos son contundentes en determinar que siempre los vieron convivir con el ánimo de formar una familia, existiendo las nociones de ayuda y socorro mutuo que comporta todo núcleo familiar, e igualmente, tres días de distanciamiento por una discusión, no logra determinar que existió una ruptura concluyente e irremediable.

En lo que respecta a la declaración extra proceso, traídas por PROTECCIÓN S.A., realizada por los señores LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA ECHEVERRY y MARÍA LUZ AGUDELO BERRIO, en donde se indican que conocieron al

señor ECHEVERRI MONTOYA, y que “... hasta el momento de su fallecimiento vivía en compañía de sus padres”, no se puede comprobar al igual como lo señaló el juez, como fue el contexto de la realización de la misma ni las razones de tiempo, modo y lugar, pues es una reproducción semejante para ambos declarantes, y que confrontada con los testigos traídos al proceso, se logra desvirtuar, pudiéndose comprobar que entre el afiliado fallecido y la demandante su existió una convivencia hasta el momento del fallecimiento del señor ECHEVERRI MONTOYA. .

Es necesario señalar que, si bien los testigos CLAUDIA LUCIA CARVAJAL y TOMAS ANTONIO PABÓN VILLEGAS, desconocían la discusión de la pareja en los últimos días de vida del afiliado, lo cierto es que si dan razón de sus dichos al señalar que tienen conocimiento directo de la convivencia, pues la primera fue la arrendadora del apartamento en donde vivía la pareja, y el segundo, el señor PABÓN VILLEGAS, frecuentaba el hogar cada 20 días por la cercanía con el afiliado fallecido, dando fe del hogar que se forjaba allí.

Conforme lo anterior, debe señalarse que, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la libre formación del convencimiento y la valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le briden convicción. Así pues, en el presente caso, el juez como director del proceso puede apreciar y valorar con un criterio de conciencia cualquier prueba decretada dentro del proceso, como ya se dijo, según las reglas de la sana crítica.

Teniendo en cuenta lo razonamientos anteriores y lo indicado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL10118-2015, el juzgador fundamentará su decisión en los elementos probatorios que le merezcan mayor persuasión y credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure la comisión de un yerro fáctico.

Así las cosas, debe decirse que la señora MARÍA ISABEL BERRIO ECHEVERRI, logró acreditar el requisito de convivencia en calidad de compañera permanente, dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento del

afiliado como lo exige la norma, para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor LUÍS GUILLERMO ECHEVERRI MONTOYA, tal y como lo señalo el juez, debiéndose entonces **CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia.

ii. Entidad responsable del reconocimiento.

En lo que respecta a este punto, se hace necesario traer lo dispuesto en el artículo 80 de la ley 100 de 1993, el cual reza:

*“La **renta vitalicia inmediata**, es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado o beneficiario contrata directa e irrevocablemente con la aseguradora de su elección, el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho. Dichas rentas y pensiones deben ser uniformes en términos de poder adquisitivo constante y no pueden ser contratadas por valores inferiores a la pensión mínima vigente del momento.*

La administradora a la que hubiere estado cotizando el afiliado al momento de cumplir con las condiciones para la obtención de una pensión, será la encargada de efectuar, a nombre del pensionado, los trámites o reclamaciones que se requieran, ante la respectiva aseguradora. (Negrilla fuera del texto)

Conforme al párrafo anterior, es claro que corresponde a la administradora de pensiones, en este caso PROTECCIÓN S.A., todo el trámite administrativo o reclamaciones para el estudio de los posibles beneficiarios, pues tal y como lo señaló el testigo traído por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., el señor MIGUEL ANTONIO FERIA, quien labora en el área de rentas vitalicias y es el encargado de pagar la nómina de los pensionados, que SURAMERICANA solo se encarga de ser un pagador, sin poder decidir quiénes son los beneficiarios de la prestación económica.

Atendiendo a que la obligación en el reconocimiento de la prestación económica está a cargo de la AFP por mandato legal y no de SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A., es aquella la encargada de pagar la misma, sin que para ello trascienda el hecho de que los dineros de la cuenta de ahorro individual fueron trasladados a esta última. Y es que las obligaciones contractuales entre fondo de pensiones y aseguradora no son del resorte de este proceso, debiéndose **CONFIRMAR** la sentencia en este sentido.

iii. Intereses moratorios.

En lo que tiene que ver con esta pretensión, es claro que los intereses fueron creados por la ley 100 de 1993 para resarcir el retardo de la entidad de seguridad social, que estando obligada al pago de las mesadas pensionales de que trata dicha ley, no las cancele de manera oportuna, así lo prevé el artículo 141 de la ley 100 de 1993. Y para esto, la ley estableció un término para darle respuesta a la solicitud elevada por los accionantes, la cual se encuentra consagrada en el inciso final del artículo 1° de la ley 717 de 2001, que indica que: *“...el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad correspondiente, deberá a efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario”*.

En este orden de ideas, la mora de la entidad sólo opera luego de pasados dos meses de radicada la solicitud de reconocimiento pensional, con el lleno de los requisitos, lo cual es apenas lógico, puesto que la entidad, dentro de tal plazo y una vez presentada la solicitud de la pensión por parte del beneficiario, previo al reconocimiento del derecho, debe entrar a corroborar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la normatividad aplicable.

De acuerdo a lo anterior, para esta Sala no hay duda que PROTECCIÓN S.A. incurrió en mora en el pago de las mesadas pensionales adeudadas a la señora demandante, pues existió una reclamación de la prestación económica, la cual fue recibida por la entidad el 5 de abril de 2017, como se observa con el documento de folio 37 del expediente digitalizado, por lo que es desde esta fecha, que se debe tomar el plazo de los 2 meses para que corran los intereses moratorios, por tal razón, PROTECCIÓN S.A. adeuda intereses moratorios desde el 5 de junio de 2017, y hasta que se satisfagan las obligaciones, como lo señaló el juez.

En lo que respecta a la apelación interpuesta por la demandada, es necesario aclarar que, si bien en ciertos casos no es dable imponer intereses moratorios, esto no está sometido a un análisis de la conducta de la entidad y su posible apego a los postulados de la buena fe, sino a escenarios excepcionales y puntuales como lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3785-2020, en donde indicó que *“...la Corte también ha reconocido que existen algunos escenarios excepcionales y muy precisos en los que no se puede asumir que la entidad administradora de pensiones esté en mora de pagar las prestaciones que*

están a su cargo, bien porque actúa con apego al ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas (ver CSJ SL6326-2016, CSJ SL8552-2016, CSJ SL4948-2017, CSJ SL072-2018 y CSJ SL984-2019) o porque existe algún conflicto entre potenciales beneficiarios de la pensión, que solo puede ser dirimido por la justicia ordinaria (CSJ SL704-2013, CSJ SL13369-2014, CSJ SL14528-2014, CSJ SL11940-2017, CSJ SL1354-2019 y CSJ SL2239-2019, entre otras)”; de acuerdo a ello, debe indicarse que en el caso objeto de estudio no se presenta ninguna de las anteriores figuras, por tal razón, son procedentes los mismos.

Por lo anterior, se deberá **CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia en tal sentido.

Corolario de todo lo anterior, es que la sentencia de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA** en su integridad.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas.

Las costas procesales de la primera instancia como lo dijo el juez. En esta instancia son a cargo de PROTECCIÓN S.A. por no salir adelante el recurso de apelación. Las agencias en derecho de la segunda instancia se tasan en la suma de \$1.000.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** íntegramente la sentencia de la primera instancia, que se revisa por vía de apelación, de fecha y procedencia conocidas.

SEGUNDO: Costas procesales y agencias en derecho como se dejó dicho en la parte motiva de esa providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	María Isabel Berrio Echeverri
DEMANDADO	Protección S.A.
LITISCONSORTE	Seguros de Vida Suramericana S.A. y Ana Lucía Echeverri Berrio
RADICADO	05-001-31-05-009-2019-00373
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN Fijado el 19 de agosto de 2022 a las 8:00am	CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN Se desfija el 19 de agosto de 2022 a la 5:00pm
--	--


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO